

México y América Latina: la cambiante relación de fuerzas entre lo social y lo político desde una perspectiva de cambio posneoliberal

Lucio Oliver Costilla*

* *Doctor
en Sociología.
Profesor titular,
Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Coordinador
del Posgrado en Estudios
Latinoamericanos
de la UNAM.*

Duele y preocupa Atenco. Desde las calles de Atenco y desde todas las calles de los otros Atencos mexicanos se escruta la carga del pasado, la realidad del presente y lo que probablemente será buena parte del futuro escenario de México. Tres temas resumen lo sucedido. Primero, el hartazgo de las clases marginadas; segundo, el fracaso de los políticos priistas y el del gobierno del cambio de Vicente Fox para mejorar la calidad de vida de más de la mitad de los connacionales y, por último, el odio que surge por la combinación de los dos factores previos. Me repito y agrego: Atenco duele y da miedo.

Arnoldo Kraus, *La Jornada*, 10 de mayo de 2006

Los represores desean que quede bien establecida la decisión de imponer en México un régimen de mano dura, a unas semanas de las elecciones presidenciales. El Secretario Federal de Seguridad Pública ni siquiera aparentó alguna forma, aunque fuese sabidamente falsa, de preocupación justificada por la barbarie cometida por policías en la llamada "recuperación" de Atenco. Por el contrario, evocó criterios de eficacia y peroró sobre el legítimo derecho del Estado a ejercer la violencia, pero sin detallar ni explicar las razones de la conducta cavernaria de agentes federales (y del estado de México) vistos en ese momento en pantalla en pleno ejercicio de abusivo y criminal desquite contra pobladores inermes.

Julio Hernández, *La Jornada*, 9 de mayo de 2006

Las democracias neoliberales latinoamericanas, con todos sus logros institucionales, se han visto afectadas por una tendencia al vaciamiento de la participación ciudadana y al abandono de las demandas sociales por la política institucional, lo cual no deja de ser una triste paradoja: después de recorrer un largo camino de décadas, luchar contra cíclopes dictatoriales y evolucionar en el aprendizaje de cuestiones civiles y jurídicas, nuestras poblaciones –flamantes ciudadanos con mayores derechos políticos y electorales dentro de instituciones civiles republicanas– se topan, al final del camino (camino que tuvo como objetivo justamente la gran tarea de la conquista de la democracia), con la dominación plena del capital financiero transnacional, la entronización de elites políticas neoliberales en los aparatos de poder y en los partidos políticos populares, y la imposición autoritaria desde el Estado de políticas económicas y sociales concentradoras de la acumulación capitalista, empobrecedoras de la población y excluyentes en lo social. Esta paradoja del “vaciamiento” llevó a numerosos analistas ya en los últimos años del siglo XX a hablar de la crisis de legitimidad del Estado neoliberal. En la vida política real de buena parte de los países latinoamericanos, las contradicciones de la situación se han expresado en diversas y recurrentes crisis políticas, surgidas por la actividad de múltiples movimientos sociales de todo tipo, que muestran la inconformidad social con las mencionadas políticas institucionales.

México, como los otros países de la región, ha vivido, tanto los avances de las luchas ciudadanas por una nueva democracia, como el “acceso al vacío” en lo político institucional y el aparecimiento de un autoritarismo de derecha. El gobierno actual del Estado mexicano, basado en la posición privilegiada que tiene en la geografía del neoliberalismo debido al apoyo del gobierno de Estados Unidos, ha incumplido obligaciones constitucionales en política exterior e interna, ha repartido y privatizado el fondo público entre las familias de las elites del poder nacional y transnacional, ha permitido que las oligarquías regionales actúen violenta e ilegalmente, que fuerzas policíacas y

***“México,
como los otros
países de la región,
ha vivido, tanto
los avances
de las luchas
ciudadanas
por una nueva
democracia,
como el ‘acceso
al vacío’ en
lo político
institucional
y el aparecimiento
de un autoritarismo
de derecha”***

militares estatales quiebren el estado de derecho al servicio de intereses inmediatos de los gobiernos, y que mafias de narcotraficantes y contrabandistas actúen contra los ciudadanos, los líderes sociales y la opinión pública.

En lugar de mejorar, con la alternancia política el cuadro político real de México ha empeorado. Hay en ello un déficit democrático de la propia institucionalidad: bajo el presidente Fox se han perpetuado instituciones no democráticas en el nuevo contexto del republicanismo electoral. El poder judicial no tiene autonomía respecto del poder ejecutivo, y debido a ello no hay, a pesar de las leyes, posibilidad de fiscalizar y limitar el uso de los recursos del Estado y el financiamiento oscuro de las campañas electorales. En el poder legislativo no hay control de los comportamientos delictuosos de buena parte de los parlamentarios que por vacíos legales se han dedicado a interactuar corruptamente entre lo público y lo privado. Los medios de comunicación dominantes son verdaderos monopolios cerrados, inaccesibles a los sectores no empresariales de la sociedad civil y a los ciudadanos. Los grandes partidos políticos están amamantados por financiamientos estatales y son verdaderas oligarquías sin control ciudadano.

El grupo que se encuentra hoy en el poder no cumplió su promesa de reconstruir las instituciones en un sentido democrático, y el partido derrotado hace seis años en las urnas, el octogenario PRI, no se transformó para dar lugar a un partido moderno diferente: se afianzó en sus reductos locales de poder, en los gobiernos de los estados y municipios que están en manos de oligarquías tradicionales, y se preparó para la reconquista del gobierno con los peores hombres y los vicios políticos más nefastos. Esta terrible situación no se dio sin lucha interna en ambos partidos, pero las corrientes ideológicas y políticas democráticamente más coherentes y lúcidas fueron derrotadas. La causa fundamental de esa derrota se encuentra en el fortalecimiento internacional y nacional de los grupos más vinculados a posiciones ultraconservadoras, así como en la burocratización e internacionalización de las políticas neoliberales de Estado.

Durante el período de Fox se abrió paso un grupo ideológico político de ultraderecha —el “Yunque”. Se aprobaron leyes contra los derechos indígenas. Se privatizaron más empresas estatales y se entregó la minería a grupos extranjeros. Se vendieron los dos mayores bancos del país a instituciones extranjeras, el Citibank y el grupo español Bilbao Vizcaya, sin que estos pagasen siquiera impuestos por la compra. Se dieron concesiones para la explotación privada de recursos naturales colectivos en varias regiones del país. Se aumentaron las concesiones a los monopolios mediáticos. Al fin y al cabo, la bandera de una reforma democrática profunda no era parte del bagaje de los empresarios que se apropiaron del PAN, ni de las elites priístas recientemente despojadas del poder ejecutivo nacional.



© CMI Chiapas

Esa bandera –la lucha por la democracia plena en las instituciones–, en cambio, se encontraba en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el cual, con su incursión plena en la vida electoral y parlamentaria, fue disminuyendo el tono y encontrando comodidad en las discusiones parlamentarias alejadas de las demandas sociales y en los trabajos burocráticos y de especialistas sobre temas menores de política pública. Su prurito democrático se transformó en una posición ideológica abstracta sin relación con las reivindicaciones sociales. Algunos dirigentes fueron más allá en su extravío:

se dejaron corromper por el dinero fácil de empresarios corruptos. Eso los fue alejando de las luchas sociales y encerrando en el cretinismo parlamentario, no obstante la persistencia y coherencia de unos pocos diputados de ese partido.

Por lo anterior, el contrapeso institucional al foxismo no fue el PRD, sino el gobierno del Distrito Federal, cuyo jefe se mantuvo en el PRD pero se distanció de la dirigencia perredista y se deslindó de la corrupción en el partido, atrajo a priístas y panistas descontentos, atendió mediante el diálogo los problemas sociales y políticos locales, benefició la acumulación de los empresarios locales y de las transnacionales automotrices, confrontó permanentemente al gobierno nacional foxista deslindándose de sus políticas anticonstitucionales y privatizadoras, y aplicó políticas sociales básicas recomendadas por el Banco Mundial (entre otras, orientadas a la atención a los ancianos y a los más desprotegidos).

La alianza política derechista dominante, formada por los grupos dirigentes en el PAN y el PRI, se percató de que su descenso en la legitimidad y en popularidad tenía correlato en la subida en las encuestas de su oponente del PRD, López Obrador, que expresaba en la clase política las demandas de los movimientos sociales de cambiar las políticas públicas y los reclamos del sector capitalista productivo, nacionalista y popular, que tiene el visto bueno de algunos empresarios transnacionales oligarcas modernos y neoliberales, como Carlos Slim. El gobierno nacional intentó desplazar a López Obrador por la vía del “desafuero”, antes del inicio del período electoral de cambio de presidente: los diputados del PAN y del PRI despojaron de la inmunidad al jefe de gobierno del Distrito Federal y lo sacaron de su puesto por unos días con argumentos insustentables legalmente, con el objetivo de meterlo a la cárcel a fin de evitar que participase como candidato a la presidencia en la campaña electoral. La respuesta social a esas artimañas de la

“pequeña política” fue sorprendente: se recuperó un movimiento ciudadano por la legalidad, la transparencia y la democracia electoral, y se produjo la manifestación más grande de la historia de México en contra del desafuero. En lo más agudo de la crisis de abril de 2005, Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra el deterioro de las instituciones y por un nuevo proyecto de país. Bajo la crisis política interna y la reprobación internacional, Fox desistió del desafuero.



© CMI Chiapas

A finales de 2005 todo parecía indicar que nuevamente el espacio electoral habría de recobrar legitimidad en el 2006, y que sería el canal institucional adecuado para dirimir las fuerzas y las contradicciones de los grupos políticos, y a la vez para canalizar la demanda social de reforma de las instituciones y de políticas económicas y sociales incluyentes y populares.

El zapatismo, expresión de las fuerzas sociales emergentes de la última década, aislado por su trabajo político localizado en las comunidades indígenas del sureste de México, se opuso a la campaña electoral en curso y a todos los partidos participantes, llamando a constituir un movimiento por la “Otra Campaña” contra el capitalismo y contra los de arriba. Se propuso desprestigiar la campaña electoral a nivel nacional, y organizar a los de abajo para la lucha por sus reivindicaciones haciendo una gira por todo el país.

México sufre profundamente en los períodos electorales debido a la falta de compromiso democrático de las fuerzas políticas y la podredumbre y precariedad de sus instituciones actuales. La obligación constitucional de poner en manos de “la sociedad” la elección y la legitimidad del nuevo gobierno, al menos en los papeles, altera profundamente a las fuerzas políticas institucionales.

El gobierno de Fox detectó muy pronto el rechazo de amplios sectores de la sociedad a la continuidad de su partido en la presidencia: las encuestas y las expresiones de los ciudadanos en los actos públicos indicaban claramente el reproche social amplio por el incumplimiento de sus promesas de campaña y por las consecuencias sociales de sus políticas neoliberales. Ante ello hay evidencias suficientes (expresadas incluso con demandas legales de los dos partidos opositores más grandes, el PRD y el PRI), de que desde el gobierno se ha diseñado una política de intervención en las elecciones para

presidente. Se puede observar dicha intervención en por lo menos cuatro aspectos: insistir, a través de los medios de comunicación, en una visión idílica del país, inventando indicadores sociales que elogian al neoliberalismo, planteando una coincidencia constructiva con el presidente de EE.UU. en las políticas económicas y de seguridad, y ocultando el papel de las remesas de los migrantes y de los recursos del petróleo en la compensación del estancamiento productivo; garantizar la continuidad de las políticas neoliberales y de las elites del poder por medio de leyes casuísticas y candados que son amarras para el futuro presidente, aprobando leyes reaccionarias con proyección de largo plazo, concediendo franquías públicas con licitaciones arregladas, y autonomizando sectores del gobierno responsables de las políticas económicas; estimular a los monopolios de los medios de comunicación para que desdibujen el lado social y político de los problemas nacionales y encajonan la lucha electoral a fin de hacerla aparecer sólo como lucha de ideas, exclusivamente en función de la propaganda mediática y su visualización en la televisión; y construir una política de miedo social basada en la criminalización de las protestas sociales y de las luchas de los movimientos.

La estrategia del gobierno tiene su límite en la realidad social. Lo político es lo social concentrado; siempre una correlación de fuerzas sociales, algunas veces matizada y deformada por el peso de los aparatos institucionales, pero correlación de fuerzas al fin. El fetichismo de las instituciones tiende permanentemente a ocultar esa realidad, pero esta termina siendo la referencia última. Hoy la relación entre lo social y lo político en México está desbordando el límite de las instituciones: nos plantea el surgimiento de una resistencia social activa descontrolada en contra de las políticas neoliberales y de sus autores. En el asunto de la relación entre lo social y lo político, la peculiaridad de México, pilar del neoliberalismo regional, es que más que una resistencia focalizada contra tal o cual partido político o grupo de gobierno, los movimientos sociales han empezado a cuestionar a toda la elite política,

“En el asunto de la relación entre lo social y lo político, la peculiaridad de México, pilar del neoliberalismo regional, es que más que una resistencia focalizada contra tal o cual partido político o grupo de gobierno, los movimientos sociales han empezado a cuestionar a toda la elite política”

a la que ubican como subordinada a la hegemonía neoliberal y a un orden social excluyente y marginalizante.

Los políticos de la derecha han mostrado dificultades para entender los mensajes: desconocen la importancia y el valor de la resistencia social múltiple, a la cual menosprecian por su falta de proyecto político institucional alternativo y por lo espontáneo de sus acciones y, tienden a criminalizarla, desconociendo la legitimidad de su lucha y del conflicto.

La búsqueda de favorecer a los grupos empresariales ligados a él y el intento de apoyar al candidato de su partido en las elecciones, Felipe Calderón, han llevado a Fox a linchar moralmente a López Obrador a quien acusa de ser un peligro para México y a provocar a los movimientos sociales, ensangrentando sus manos en tres ocasiones recientes: dejando morir, sin buscar a los responsables y sin ayudar, a las 65 víctimas de una explosión en una mina de carbón que carecía de las mínimas condiciones de seguridad (Pasta de Conchos, Coahuila); enviando a la policía a quebrar una huelga y desalojar siderúrgicas cuyos trabajadores reclamaban autonomía sindical (SITCARSA) con el resultado de dos trabajadores muertos; y el 4 de mayo, interviniendo por medio de un operativo policiaco en el pueblo de Atenco, cercano a la ciudad de México, población en su mayoría vinculada a la "Otra Campaña", y, junto con el gobernador priísta del Estado de México, ordenando la intervención de una policía vengativa, que golpeó con saña a pobladores y mujeres, y encarceló a los dirigentes y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; los mismos que, años atrás, le impidieron al presidente Fox, con su resistencia social activa, expropiar sus terrenos y construir un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México.

Estos tres conflictos recientes muestran claramente las consecuencias, en términos de ingobernabilidad, de las políticas económicas y sociales del neoliberalismo y la opción por políticas autoritarias por parte del gobierno:

El tiempo sigue pasando y los cuerpos de los 65 mineros en Pasta de Conchos continúan bajo tierra, sus familiares acuden de un lugar a otro sin recibir indemnización, no se han fincado responsabilidades, y están ausentes las medidas que eviten catástrofes similares. Casi han pasado tres meses del inicio del conflicto promovido por la línea dura del foxismo, que ha ido exhibiendo las contradicciones e iniquidades en el sector de la minería: su tortuoso proceso de privatización y especulación en metales, que han producido gigantescas utilidades beneficiando particularmente a Minera México y Villacero, una red de complicidades en la que participan ex funcionarios, hoy accionistas y un modelo laboral caracterizado por salarios ínfimos, contratación irregular de trabajadores y baja inversión en medidas de seguridad; una muestra del México de hoy (Arturo Alcalde Justiniani, *La Jornada*, 13 de mayo de 2006).

El segundo conflicto está vinculado a la violación por parte del gobierno de Fox de la autonomía sindical de los trabajadores mineros por el reconocimiento oficial como dirigente a un líder desconocido por los trabajadores y favorable a los dueños de las minas, hecho que llevó a la huelga en SITCARSA y a la intervención policiaca.

El tercer conflicto, el más reciente y quizá el más grave, es el del operativo policiaco contra el pueblo de Atenco, que dejó ver claramente los hilos de una política de criminalización de la protesta social. La acción policial resultó en la muerte de un adolescente, vejámenes graves contra mujeres y ancianos, arrestos ilegales, y destrucción indiscriminada y masiva de casas y bienes de los pobladores. Fue tan grave este hecho que algunos analistas moderados lo califican de un nuevo '68:

De confirmarse los hechos denunciados por las dos ciudadanas españolas, sobre la detención y transporte en un camión de 40 hombres y mujeres que fueron amarrados, privados de la visión, golpeados, amenazados, y las mujeres ultrajadas sexualmente, por el solo hecho de encontrarse probablemente durmiendo en algunas de las muchas viviendas allanadas, estaríamos enfrentando una situación sólo comparable a lo ocurrido durante el conflicto de 1968 (Enrique Calderón, *La jornada*, 13 de mayo de 2006)

Estos hechos están mostrando el uso extremo de la violencia de Estado al que ha llegado el gobierno actual en su pretensión de crear el discurso del miedo para producir una inhibición de la participación electoral, y por medio de un fuerte abstencionismo imponer a su candidato de ultraderecha, Felipe Calderón, y también la complicidad del grupo de Roberto Madrazo, candidato del ultraconservador PRI.

Ante esas políticas no hay una respuesta activa y crítica por parte del candidato del centro moderado, López Obrador, que está solicitando a todas las partes cerrar filas en torno a la paz social y la legalidad en las elecciones.

Lo preocupante de la situación es que la lucha social está encaminándose a cuestionar a toda la política institucional y todos los políticos de partido. Lo social está empezando a dominar a lo político, y el clima mexicano amenaza con desbordarse. Para los intereses dominantes hoy —la ultraderecha y los nuevos empresarios nacionales y estadounidenses—, el candidato del centro moderado, López Obrador, constituye un peligro, porque es aún un espejo borroso de una situación social explosiva; por ello prefieren alinearse con la política de ultraderecha, para que México siga bajo los dictados de los líderes actuales del imperio del Norte en materia de acumulación transnacional, políticas económicas, seguridad pública y seguridad nacional. Hay, entonces, indicios de una crisis de la política institucional, pues esta se resiste a abrir los canales para que el descontento social

acumulado por años de exclusión y pobreza neoliberal se exprese electoralmente. Las políticas gubernamentales para encuadrar la elección del 2 de julio bajo el manto del miedo y los encuadres puestos por los medios de comunicación dominantes están, paradójicamente, expresando un cambio en la correlación de fuerzas interna, en la cual lo social empieza a desbordar a lo político institucional y crea sus propios actores políticos no reconocidos institucionalmente y criminalizados. Ese es el caldo de cultivo de una futura crisis política, y quizá el germen de la alternativa social al neoliberalismo. El triunfo de Calderón o de Madrazo, candidatos que expresan el rechazo institucional a las protestas y demandas del sector excluido y marginalizado de la sociedad, significaría la continuidad del proyecto neoliberal y un agravamiento de las contradicciones y los conflictos. La posición moderada de centro de López Obrador acepta la necesidad de abrir canales de participación social para canalizar el descontento, sin que su partido o él mismo propongan una alternativa a la crisis institucional o al neoliberalismo. Por ello, son los movimientos sociales actuales, sin cauce institucional, los que, no obstante sus limitaciones políticas, su voluntarismo y falta de proyecto, tienen en las manos, como en otros países de América Latina, la agenda de la construcción de un México posneoliberal.



© CMI Chiapas